

Nuevo libro de José Manuel Martín Medem (nº 48)

LA DEMOCRACIA FERROZ de URIBE

“COLOMBIA
FERROZ. DEL ASESINATO DE GAITÁN A LA PRESIDENCIA DE URIBE”

Álvaro

Uribe es el único presidente en la historia de América Latina acusado simultáneamente de fraude electoral, de recibir dinero del narcotráfico para su candidatura, de sobornar a parlamentarios para conseguir su reelección, de convertir los servicios secretos en una policía política, de terrorismo de Estado en complicidad con los paramilitares y de violar la soberanía nacional de Venezuela y de Ecuador. El autor de este libro intenta demostrar que en su doble mandato presidencial, con la ferocidad de la guerra contrainsurgente compartida con Estados Unidos, se condensan las estrategias de impunidad con las que los poderes económico, político y militar han impuesto durante sesenta años su modelo de apropiación de Colombia. Desde el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán en 1948, que impidió la democratización del país, hasta la presidencia de Álvaro Uribe, protagonizada por los paramilitares, los narcotraficantes, los grandes empresarios y la intervención de Estados Unidos, se ha ido fortaleciendo una falsa democracia que criminaliza a la oposición, bloquea la negociación con la guerrilla y aumenta constantemente las peores desigualdades sociales de América Latina. Uribe maneja la posibilidad de una nueva reforma constitucional para su segunda reelección y también la alternativa de colocar en la presidencia a un heredero de confianza. Sus planes dependen de cómo Barack Obama pretenda resolver el conflicto colombiano en un nuevo escenario regional donde la mayoría de los gobernantes latinoamericanos reclaman respeto y colaboración. Fuera de la presidencia, Uribe podría ser perseguido por la justicia internacional bajo la acusación de crímenes contra la humanidad.

A

continuación ofrecemos un adelanto del último libro de José Manuel Martín Medem, "Colombia Feroz. Del asesinato de Gaitán a la presidencia de Uribe” (Los Libros de La Catarata).

Durante

el primer periodo presidencial de Álvaro Uribe (2002/2006), el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) encargó a los paramilitares el asesinato de cincuenta sindicalistas. Además, los servicios secretos del DAS, que dependen directamente de la presidencia de la República, avisaban a los narcotraficantes

cuando se preparaban operaciones de las fuerzas de seguridad contra ellos.

El DAS y los paramilitares eran uña y mugre mientras se negociaba la Ley de Justicia y Paz para garantizar su impunidad.

Como suele suceder en las conspiraciones mafiosas, la alianza del DAS con los paramilitares y los narcotraficantes se descubrió porque era también una red de corrupción y dejaron fuera del juego a uno de los socios que más sabía.

En diciembre del 2005, el ex director de informática del DAS, Rafael García, decidió negociar la reducción de su condena cuando la Fiscalía comprobó que había borrado de los ficheros electrónicos los antecedentes delictivos de siete paramilitares y narcotraficantes. García se acogió a los beneficios de lo que en Colombia se denomina una sentencia anticipada (aceptando su culpabilidad y colaborando con la justicia) a cambio de contarle a la Fiscalía la penetración criminal en el DAS.

La consecuencia de su confesión fue el encarcelamiento de Jorge Noguera que había sido nombrado director del DAS por el presidente Álvaro Uribe cuando formó su primer gobierno. Las investigaciones de la Fiscalía y de la Procuraduría (el organismo que controla a los funcionarios) confirmaron las denuncias de Rafael García: fraude electoral, corrupción y colaboración criminal con paramilitares y narcotraficantes.

Noguera fue el director de la campaña presidencial en Magdalena, el único departamento de la Costa donde ganó Álvaro Uribe. Y García reveló que habían organizado un fraude mediante programas informáticos que alteraban los censos de electores y designando a gente de confianza en las mesas de votación para atribuirse el sufragio de los que no acudieron a las urnas. "Se le añadieron 300.000 votos a Uribe", aseguró García.

Como agradecimiento por su contribución a la zafra electoral, Jorge Noguera ocupó el DAS y convirtió al paramilitar Rafael García en su cómplice imprescindible.

El informático, que reconoció en la Fiscalía su vinculación clandestina con los escuadrones de la muerte, elaboró el programa para el fraude electrónico, hizo desaparecer los antecedentes de los mafiosos y le consiguió a Noguera la colaboración de su esposa y de sus amigas para que recibieran en sus cuentas las comisiones que el director cobraba al contratar suministros para el DAS. García recogía los depósitos y se los entregaba personalmente a Noguera.

La

Procuraduría comprobó que el designado por Uribe para dirigir los servicios secretos del presidente se reunía con los comandantes narcoparamilitares Rodrigo Tovar Pupo, conocido como Jorge 40, y Hernán Giraldo. Los dos fueron extraditados a Estados Unidos, con otros doce jefes de las autodefensas, para que no contaran más sobre las complicidades políticas, económicas y militares en el terrorismo de Estado.

Noguera

recibía en su despacho del DAS a Álvaro Pupo, familiar de Jorge 40 que actuaba como intermediario. Lo recaudado por las comisiones sobre los suministros para el DAS se repartía con los paramilitares que colaboraban asesinando a los sindicalistas señalados por la policía política de la presidencia de la República. «Nosotros hacíamos el trabajo sucio para el DAS que nos indicaba los objetivos», reconoció Salvatore Mancuso, comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia, antes de que también lo extraditaran.

La

Procuraduría confirmó que, además, desde el DAS se atribuían a las FARC atentados con explosivos realizados por los paramilitares.

Según

García, Noguera participó también en operaciones secretas contra el gobierno de Venezuela. El paramilitar Jorge Iván Laverde, llamado El Iguano, reconoció que el DAS le había ayudado y que en el 2003 fracasaron en un intento de atentado contra Raúl Reyes, comandante de las FARC, en territorio venezolano.

¿Lo

sabía Álvaro Uribe? Uno de los detectives encargados del control interno en el DAS le explicó al diario El Espectador que le había contado a un consejero de Uribe todo lo que estaba pasando. Su respuesta fue que «el presidente sabe todo lo del DAS y no entiendo por qué no quiere sacar a Noguera».

La

revista Semana señaló a Uribe al considerar que «la designación de Noguera y las actividades del DAS son responsabilidad política directa del presidente». Y reflejaba que «algunos críticos del gobierno ya hablan de la configuración de un Estado mafioso».

En

la Colombia de Uribe el terrorismo de Estado es absoluto: los servicios secretos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, asesorados por la CIA y la inteligencia militar estadounidense y aliados con paramilitares, sicarios y narcotraficantes, pueden asesinar a un desconocido campesino de una remota vereda o al candidato presidencial de cualquiera de los grandes partidos. Y con total impunidad. Así se impone la intimidación general, la amenaza universal de que nadie está

a salvo: ni quién se considera insignificante y cree que no vale la pena eliminarlo ni quién supone que está protegido por su protagonismo político, social o económico. Es el resultado de una dominación bipartidista, controlada por pocos y muy poderosos grupos oligárquicos que han militarizado una democracia tiñosa en permanente alianza con el imperialismo de Estados Unidos.

“El establecimiento colombiano -dice Antonio Caballero-, que siempre ha considerado útil el asesinato de los discrepantes, es de extrema derecha y amigo de la violencia. Nunca la ha temblado la mano para el genocidio”.

La encarnación de Álvaro Uribe como el macho cabrío en un Estado de narcotraficantes y paramilitares ha concentrado con ferocidad todo lo peor del modelo colombiano.

ESE
MUCHACHO BENDITO

Les llamaban CocaCola. La coca, de Pablo Escobar. Y la cola, de su amante Virginia Vallejo: en Colombia, cola es la manera decente de elogiar el buen culo de las mujeres. Esa cola se paseaba entre Bogotá y Medellín para amar y odiar al terrorista de la cocaína. Y lo sabía todo. Empezando por la conexión con Uribe. Lo cuenta en sus memorias. Para visitarlo en la clandestinidad consentida, Virginia viajaba a Medellín. En el aeropuerto la recogían los muchachos de Pablo y la llevaban al refugio del patrón. Al regreso, la dejaban en la puerta de embarque para que volviera a Bogotá. En su libro, Virginia recuerda lo que sucedió en uno de esos traslados:

Al llegar al aeropuerto los hombres de Pablo

me señalan a un señor joven con aspecto

de persona importante. Al verme, sonrío, viene

inmediatamente hacia nosotros y saluda

efusivamente
a mis acompañantes. Hacía ya

varios
años que no veía yo a aquel prometedor

egresado
de Harvard de mirada inteligente y

gafitas
de estudioso y me alegro de poder

felicitarlo
porque acaba de ser elegido

senador.
Conversamos durante algunos

minutos
y, cuando se despide con un afectuoso

abrazo,
le dice a los muchachos de Pablo:

Y
ustedes dos ¡me saludan al patrón!

El
gafitas es Álvaro Uribe, que fue director de la
Aeronáutica Civil entre 1980 y 1982. Pablo Escobar le contó
a Virginia Vallejo por qué idolatraba a Álvaro
Uribe:

Mi
negocio y el de mis socios es el transporte,

a
cinco mil dólares por kilo asegurado y está

construido
sobre una sola base: las pistas de

aterrizaje
y los aviones. Ese muchacho

bendito
nos concedió docenas de licencias

para
las pistas y centenares para los aviones.

Sin
pistas y aviones propios, todavía

estaríamos
trayendo la pasta de coca en

llantas
desde Bolivia y nadando hasta Miami

para
llevarles la mercancía a los gringos.

Gracias
a él es que yo estoy enterado de

todo
lo que pasa en la Aeronáutica Civil

en
Bogotá y en el aeropuerto de Medellín

porque
su sucesor quedó entrenado para

colaborarnos
en lo que se nos ofrezca.

Su
padre, Arturo, es uno de los nuestros

y
si un día algo se nos llegara a atravesar

a
Santofimio y a mí en el camino a la

presidencia,
ese muchacho sería mi

candidato.
Ahí donde lo ves con sus gafas y

esa
cara de seminarista, es un peleador

bravísimo.

DE
LA LISTA NEGRA A LA DE LOS FAVORITOS

Álvaro
Uribe está fichado como narcotraficante desde 1991 por
el Pentágono. Un informe de la inteligencia militar
estadounidense dice lo siguiente:

Álvaro
Uribe es un político colombiano

dedicado
a colaborar con el Cartel de

Medellín
en los altos niveles del gobierno.

Su
padre fue asesinado por sus conexiones

con
los narcotraficantes.

Es
un amigo íntimo de Pablo Escobar.

El
documento fue revelado el 9 de agosto del 2004 por los periodistas
Joseph Contreras y Steven Ambrus en la revista estadounidense
Newsweek.

La información se titulaba De la lista negra a la de favoritos y comentaba la aparente contradicción de que Uribe se hubiera convertido en el favorito de la Administración Bush (hijo) en América Latina después de haber sido incluido en la lista negra de narcotraficantes por la Administración Bush (padre).

Según Al Giordano, director general del Narco News Bulletin (www.narconews.com),
“no sería la primera vez que los Estados Unidos respaldan a un candidato presidencial en América Latina al que pueden controlar fácilmente chantajeándolo con los documentos guardados en Washington”.

En Colombia todos saben lo que el Pentágono puso por escrito. El presidente Belisario Betancur (1982/1986), que recibió dinero del narcotráfico para su campaña electoral, nombró a Álvaro Uribe alcalde de Medellín cuando la ciudad estaba dominada por Pablo Escobar. Pero tuvo que destituirlo a los cuatro meses. Uribe fue tan poco cuidadoso que aceptó reunirse con los capos del Cartel de Medellín. Betancur lo sacó de la alcaldía por narcotraficante pero, como el presidente estaba untado con la misma plata, se inventó una crisis política para justificarlo. Puede que lo sintiera mucho porque Uribe había acogido con entusiasmo el proyecto favorito de Betancur: el metro de Medellín. Virginia Vallejo recuerda que “Diego Londoño White, gran amigo de Pablo Escobar, fue el encargado de negociar las jugosas comisiones de los contratos”; y asegura que “Enrique Sarasola, amigo cercano de Felipe González, ganó casi veinte millones de dólares de comisión”. Enrique Sarasola estaba casado con la hermana de Carlos Arturo Marulanda, embajador ante la Unión Europea del presidente Ernesto Samper, procesado sin condena por su vinculación con los paramilitares.

Cuando Álvaro Uribe fue gobernador de Antioquia (1995/1997), su secretario era Juan Moreno Villa que luego le acompañó en su procesión hacia la presidencia. La DEA comprobó que Moreno aprovechaba la impunidad de su vinculación con Uribe para convertirse en el mayor importador de permanganato de potasio, un precursor químico imprescindible para la elaboración de cocaína. Los cargamentos, procedentes de Hong Kong, hacían escala en puertos de Estados Unidos antes de continuar hacia Colombia. La DEA ,que no había recibido la notificación previa exigida para el comercio internacional con el permanganato, requirió 50 toneladas del precursor adquiridas por Moreno pero la investigación se desvaneció sin consecuencias. Tampoco se sancionó al importador en Colombia a pesar de que no identificaba a la mayoría de los clientes a los que abastecía. La DEA calcula que el secretario de Uribe manejó 200 toneladas de permanganato de potasio con las que se podían elaborar ¡2.000 toneladas de cocaína!

MANO FIRME, CORAZÓN GRANDE

Gonzalo

Guillén y Gerardo Reyes revelaron en el Nuevo Herald (Miami) que Álvaro Uribe y su hermano Santiago participaron en la organización en 1997 de la masacre del caserío de El Aro, en el norte del departamento de Antioquia. El ahora presidente de Colombia era entonces gobernador de Antioquia. Los hermanos Uribe se reunieron en la finca de un hacendado con oficiales de la IV Brigada (asentada en Medellín, capital de Antioquia) y con los comandantes paramilitares Carlos Castaño y Salvatore Mancuso. El jefe de la IV Brigada era el general Carlos Alberto Ospina que ocuparía la Comandancia de las Fuerzas Armadas en el primer gobierno del presidente Álvaro Uribe. Los militares elaboraron la lista con la que los escuadrones de la muerte seleccionaron a las víctimas de la matanza. La información publicada por el Nuevo Herald procedía de la confesión del arrepentido Francisco Villalba, un desertor de las Autodefensas Unidas de Colombia que participó en la masacre de El Aro y tres meses después se entregó a la Fiscalía abrumado por las pesadillas. Reconoció que había degollado con un machete a una de las mujeres asesinadas y ahora cumple una condena de 33 años de prisión. Su grupo de paramilitares era conocido como los mochacabezas. Villalba asegura que Mancuso conserva grabaciones que prueban la participación de los hermanos Uribe en aquella reunión. La Corte Interamericana de Derechos Humanos comprobó la responsabilidad del Estado por acción y omisión. Las AUC justificaron la masacre de decenas de campesinos como una operación para escarmentar a la guerrilla; pero el objetivo era dominar la zona del Nudo de Paramillo para cultivar coca y contar con el corredor de salida al mar que les garantizaba la exportación de cocaína y la importación de armamento. El Aro era una posición estratégica.

Durante

cuatro días, 120 paramilitares saquearon la población, robaron 1.200 cabezas de ganado y asesinaron a los vecinos señalados por los oficiales de la IV Brigada. ¡Guerrilleros malparidos, se van a morir todos! gritaban los terroristas que actuaron con absoluta impunidad durante cuatro días. A uno de los campesinos lo ataron a un naranjo, le reventaron los ojos, le arrancaron los testículos y le sacaron el corazón. Mano firme, corazón grande fue el eslogan de la campaña presidencial de Álvaro Uribe.

Los

comandantes Carlos Castaño y Salvatore Mancuso fueron condenados en ausencia por la masacre de El Aro a cuarenta años de prisión pero son sólo sentencias de papel porque el primero fue eliminado por sus propios compañeros y el segundo extraditado a Estados Unidos. La investigación sobre la implicación del general Carlos Alberto Ospina se archivó por falta de pruebas.

Jesús

María Valle, del Partido Conservador y presidente del Comité de Derechos Humanos de Antioquia llevaba un año advirtiendo que «narcotraficantes, militares y escuadrones de la muerte preparan una matanza en El Aro». El gobernador Álvaro Uribe le acusó públicamente de ser «enemigo de las Fuerzas Armadas» y los paramilitares lo mataron.

Santiago,

hermano de Álvaro Uribe, fue acusado de organizar un grupo paramilitar en la hacienda familiar de La Carolina. Actuaron entre 1993 y 1994, cometiendo medio centenar de asesinatos, y se autodenominaban Los Doce Apóstoles porque les acompañaba el sacerdote Gonzalo Palacios que estuvo en prisión cautelar pero quedó en libertad «por falta de pruebas». La misma solución le aplicó la Fiscalía a las investigaciones sobre Santiago Uribe. Las familias de las víctimas llevaron sus denuncias y reclamaciones a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Juan

Diego y Mario Vélez Ochoa, primos hermanos de Álvaro Uribe Vélez, permanecieron en prisión durante casi un año bajo la acusación de organizar y dirigir la banda paramilitar de Los Erre que mató a decenas de campesinos. Un juez de apelación los sacó de la cárcel y archivó el caso argumentando que «no había pruebas suficientes». Los Vélez Ochoa forman parte simultáneamente del clan presidencial de los Uribe Vélez y de la mafia narcoparamilitar de los Ochoa Vásquez, fundadores del Cartel de Medellín.